



FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
ANDALUZAS DE MAYORES

NOTA DE PRENSA

Balance 2025 y perspectivas 2026: más presupuesto en sanidad y dependencia, pero listas de espera y dependencia colapsadas en Andalucía

El balance de 2025 para las personas mayores en Andalucía confirma una realidad que desde la Federación de Organizaciones Andalcuzas de Mayores (FOAM) venimos denunciando desde hace años: mientras se producen avances relevantes en sanidad y en la protección del poder adquisitivo de las pensiones, el sistema de atención a la dependencia sigue colapsado y sin una respuesta estructural a la altura del desafío demográfico y social que afronta la comunidad.

No se trata de un problema coyuntural ni de una tensión puntual del sistema. La dependencia en Andalucía ha dejado de estar “en riesgo” para convertirse en un sistema desbordado, incapaz de garantizar derechos básicos en tiempo y forma a miles de personas mayores.

UN AVANCE INDISCUTIBLE: LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Uno de los principales avances sociales de los últimos años ha sido la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, garantizada por la Ley 21/2021, en vigor desde enero de 2022. Esta medida ha permitido proteger el poder adquisitivo de millones de pensionistas y poner fin a años de congelaciones o subidas simbólicas que erosionaron gravemente sus ingresos.

Además, desde 2024 se ha consolidado un nuevo esquema de revalorización reforzada para las pensiones mínimas contributivas y las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, en aplicación del Real Decreto-ley 2/2023, en el marco de la reforma del sistema público de pensiones.

En 2025, las pensiones mínimas han registrado incrementos en torno al 6%, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentaron aproximadamente un 9%, muy por encima del IPC general, situado en torno al 2,8%.

Para 2026, ya aprobado, las pensiones mínimas contributivas subirán un 7,07% (hasta un 11,4% en determinados supuestos familiares), y las no contributivas un 11,4%, frente a un IPC estimado del 2,7%.

Este mecanismo, alineado con la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, supone un avance relevante para reducir la pobreza entre los pensionistas con menores ingresos. Sin embargo, estos incrementos resultan claramente insuficientes si no se acompañan de políticas públicas eficaces en dependencia, cuidados, vivienda y servicios sociales.

DEPENDENCIA: UN SISTEMA COLAPSADO POR LA INFRAFINANCIACIÓN

La atención a la dependencia sigue siendo el principal fracaso de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores en Andalucía. En 2025 no solo no se ha revertido el colapso del sistema, sino que se ha consolidado como un problema estructural.

Las listas de espera superan ampliamente los 500 días, con una media de 512 días según datos del IMSERSO a noviembre de 2025 (frente al plazo legal de 180 días), y, según los últimos datos oficiales disponibles, 6.784 personas han fallecido en Andalucía durante 2025 mientras esperaban una prestación o servicio reconocido por ley (5.486 pendientes de valoración y 1.298 con derecho, pero sin recibir atención). Estas muertes no son una estadística: son la consecuencia directa de retrasos incompatibles con la realidad vital de las personas mayores.

Aunque se ha alcanzado un récord de 320.680 personas atendidas en el sistema a finales de noviembre, esto no compensa el colapso, con 41.344 personas aún en espera.

La infrafinanciación crónica del sistema, tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, se perpetúa en los presupuestos previstos para 2026. El Estado aportará aproximadamente el 29% del coste total del sistema (alrededor de 770 millones de euros, según datos oficiales y cálculos de la Junta para el presupuesto de 2.610,6 millones de euros de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía), muy lejos del 50% establecido por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, incumpliendo de forma sistemática su obligación de corresponsabilidad financiera.

Esta cifra representa una disminución porcentual respecto al último dato definitivo certificado para 2024 (34,90%), agravada por la congelación de aportaciones extraordinarias estatales desde 2023 y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que ha mantenido la financiación central en niveles insuficientes. Como consecuencia, la Junta asume el 71% del esfuerzo presupuestario.

Andalucía destinó en 2025 aproximadamente el 0,9% de su PIB a la dependencia y prevé alcanzar el 1,13% del PIB en 2026 (unos 2.610,6 millones de euros), una cifra claramente insuficiente y muy alejada del 2% del PIB recomendado por la Unión Europea para garantizar un sistema digno, eficaz y sostenible.

La consecuencia es devastadora: personas mayores que envejecen, empeoran o fallecen sin haber recibido nunca la ayuda a la que tenían derecho. La dependencia no mata, pero condena a morir sin cuidados, sin apoyos y sin dignidad a miles de personas mayores cada año.

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO: MÁS NECESIDADES, LOS MISMOS RECURSOS

El colapso del sistema de dependencia se ve agravado por una realidad demográfica incontestable. Andalucía envejece de forma acelerada, especialmente en los grupos de edad más avanzada, aquellos con mayores necesidades de cuidados intensivos.

En 2025, el denominado “invierno demográfico” se ha intensificado, con 14.360 nacimientos frente a 20.729 defunciones solo en el primer trimestre del año. Sin embargo, no existe una planificación realista de servicios, personal ni financiación que se adapte a este escenario.

Mantener el actual nivel de inversión equivale, en la práctica, a normalizar el colapso y asumir que miles de personas quedarán desatendidas.

POBREZA Y PRECARIEDAD: UNA VEJEZ EN RIESGO

El contexto social y económico sigue siendo especialmente adverso para las personas mayores en Andalucía. El 35,6% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para 2024, publicada en 2025), con una renta media anual de 11.719 euros, casi 2.300 euros por debajo de la media nacional.

Entre las personas mayores, esta situación se agrava:

- Casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos.
- Dos de cada cinco pensiones son inferiores a 785 euros mensuales.
- El encarecimiento de la vivienda, la energía y los alimentos neutraliza buena parte de las subidas de ingresos.

En este contexto, incluso las mejoras en pensiones resultan insuficientes para garantizar una vejez digna.

SOLEDADE NO DESEADA: UNA EPIDEMIA SILENCIOSA QUE AFECTA A TODAS LAS EDADES

La soledad no deseada se ha consolidado como uno de los principales problemas de bienestar en Andalucía, con graves consecuencias para la salud mental, física y social. Según el Barómetro de la Soledad no Deseada en Andalucía 2024 (Fundación ONCE y Fundación AXA, en el marco del Observatorio SoledadES), el 22,6% de la población adulta andaluza sufre soledad no deseada en este momento (dos puntos por encima de la media

nacional del 20%), y el 16,3% la padece de forma crónica (más de 2 años), superando también la media estatal (13,5%).

Aunque el fenómeno afecta con especial intensidad a los jóvenes (30,2% en el grupo 18-34 años), las personas mayores siguen siendo un grupo vulnerable: el 19,4% de los mayores de 55 años (y ≈19% en >65 años) experimenta soledad no deseada, con mayor incidencia en mujeres (27,6% frente a 17,4% en hombres), personas que viven solas (41,9%), con discapacidad (hasta 60%), en entornos rurales o con problemas de salud mental/física.

Andalucía acapara el 19,7% de los casos nacionales de soledad no deseada —segunda posición tras Madrid (21,5%)—, según el Mapa Nacional de 2025 del Teléfono Dorado, lo que refleja la grave combinación de envejecimiento rural acelerado y debilitamiento de redes familiares en entornos urbanos. Este volumen significativo se explica por la combinación de un envejecimiento acelerado en zonas rurales, el debilitamiento de redes familiares tradicionales y entornos urbanos con menor cohesión social.

La soledad no deseada no es solo un malestar emocional: deriva en depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, mayor riesgo de demencia, problemas cardiovasculares y aislamiento progresivo. Estudios complementarios (como los de la UPO y la web Júntate de la Junta) indican que más del 40% de las personas viudas >55 años reportan sentirse solas con frecuencia, y que la prevalencia aumenta con la edad avanzada (>80 años).

Desde FOAM insistimos en que esta epidemia silenciosa requiere estrategias integrales urgentes: programas de detección temprana, fomento de comunidades colaborativas, potenciación de centros de participación activa, apoyo a iniciativas como el Teléfono Dorado o Júntate, y medidas específicas contra el aislamiento en rurales y personas con discapacidad. La nueva Estrategia para la Promoción de una Vida Activa y Atención a la Soledad en Personas Mayores 2025-2030 de la Junta es un paso positivo, pero debe ir acompañada de recursos suficientes y evaluación continua.

BRECHA DIGITAL: UNA NUEVA FORMA DE EXCLUSIÓN

La digitalización acelerada de servicios esenciales ha generado una nueva forma de exclusión. En España, más del 27% de las personas mayores de 65 años nunca ha utilizado internet, lo que limita gravemente su autonomía, el acceso a derechos y la participación social.

Aunque la Junta de Andalucía ha impulsado iniciativas como la Red de Puntos Vuela, estas resultan claramente insuficientes mientras desaparece la atención presencial en banca, administración, sanidad y servicios sociales. La brecha digital no es solo un problema tecnológico: es una cuestión de justicia social.

SANIDAD: MÁS INVERSIÓN, PERO CON LÍMITES ESTRUCTURALES QUE SIGUEN AFECTANDO A LAS PERSONAS MAYORES

FOAM reconoce el esfuerzo inversor realizado en sanidad por la Junta de Andalucía en los últimos años. El presupuesto sanitario andaluz alcanzó en 2025 aproximadamente los 15.250 millones de euros y se elevará en 2026 hasta los 16.265 millones, lo que supone un incremento acumulado cercano al 66% respecto a 2018. Este aumento ha permitido situar el gasto sanitario por habitante por encima de la media nacional por segundo año consecutivo, con una cifra estimada en torno a los 1.885 euros por persona.

Este esfuerzo presupuestario es necesario y positivo, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la cronicidad, la multimorbilidad y la mayor demanda de cuidados sanitarios continuados. Sin embargo, el incremento del presupuesto no se está traduciendo de forma suficiente en una mejora estructural y homogénea del acceso, la calidad y la continuidad asistencial, especialmente para las personas mayores.

En atención primaria, pilar fundamental del sistema sanitario y primer nivel de contacto para la población mayor, la situación continúa siendo especialmente preocupante. **Las citas médicas superan habitualmente los diez días de espera** y en muchos centros de salud las demoras se prolongan aún más en periodos de alta demanda. Esta falta de acceso ágil dificulta el seguimiento clínico de pacientes crónicos y pluripatológicos,

retrasa diagnósticos, incrementa el uso inadecuado de las urgencias hospitalarias y contribuye al agravamiento evitable de patologías que podrían haberse controlado de forma precoz.

En la atención especializada, los tiempos de espera siguen siendo claramente inaceptables. En junio de 2025, la demora media para una consulta con especialista se situaba en torno a los 127 días, pese a la reducción registrada respecto a finales de 2024. Más de 448.000 personas permanecían fuera del plazo legal máximo de 60 días, una situación especialmente grave para las personas mayores, que concentran buena parte de las patologías crónicas, degenerativas y de mayor impacto funcional.

Las listas de espera quirúrgicas, aunque han experimentado una mejora respecto a los peores momentos de 2024, continúan representando un problema estructural. La espera media se situaba en torno a los 108 días en junio de 2025, con cerca de 207.000 personas pendientes de intervención y entre un 18% y un 25% de pacientes fuera de los plazos de garantía. En las personas mayores, estos retrasos implican pérdida de autonomía, deterioro funcional, aumento del dolor y un mayor riesgo de complicaciones evitables.

Especialmente preocupante resulta la situación de las urgencias hospitalarias. Durante los picos estacionales, como la ola de gripe registrada en diciembre de 2025, se han producido colapsos con esperas de hasta 14 horas para la atención inicial y demoras de varios días para el ingreso hospitalario. Estas situaciones suponen un riesgo evidente para las personas mayores, frágiles o con patologías crónicas, y reflejan la falta de planificación suficiente ante escenarios previsibles.

A pesar del aumento de la actividad asistencial, los planes de choque y los conciertos con el sector privado, los problemas estructurales persisten. La insuficiencia de plantillas, la sobrecarga de los profesionales y la falta de estabilidad laboral limitan la capacidad real del sistema para absorber la demanda creciente.

Desde FOAM advertimos además de la ausencia de una verdadera coordinación sociosanitaria. La desconexión entre el sistema sanitario y el sistema de dependencia provoca altas hospitalarias sin apoyos suficientes, reingresos evitables y una sobrecarga innecesaria tanto para las familias como para los servicios sanitarios. Sin un refuerzo decidido de la atención domiciliaria, la rehabilitación y los cuidados intermedios, el aumento del gasto sanitario seguirá teniendo un impacto limitado sobre la calidad de vida de las personas mayores.

En definitiva, el aumento del presupuesto sanitario es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin reformas organizativas profundas, refuerzo estable de profesionales, reducción real de listas de espera y una apuesta decidida por la coordinación sociosanitaria, las personas mayores seguirán soportando demoras, desigualdades y una atención fragmentada que no responde a sus necesidades reales.

DÉFICIT DE PLAZAS RESIDENCIALES

Andalucía mantiene un déficit estructural de plazas residenciales, con una ratio de apenas 2,95 camas por cada 100 personas mayores de 65 años y un déficit estimado de alrededor de 35.857 plazas para alcanzar los estándares recomendados (5 por cada 100 mayores). Aunque existen proyectos para ampliar la red, estos aún no compensan las necesidades actuales ni la evolución demográfica prevista.

PERSPECTIVAS PARA 2026: SIN CAMBIO REAL, EL COLAPSO SE CONSOLIDA

El balance de 2025 y las previsiones para 2026 muestran que, sin un cambio profundo de prioridades, el colapso del sistema de dependencia se consolidará. La inversión sanitaria récord es bienvenida, pero no puede ocultar el abandono estructural de los cuidados de larga duración, ni los tiempos de espera inaceptables en sanidad que siguen afectando gravemente a las personas mayores.

Desde FOAM reclamamos:

- Un plan extraordinario 2026-2029 que eleve la financiación autonómica de la dependencia al 1,58% del PIB en 2026 —como ya hacen o superan algunas comunidades como Extremadura en inversión relativa por

habitante y potencial dependiente—, y establezca una senda clara y progresiva hacia el 2% del PIB recomendado por la Unión Europea para un sistema digno y sostenible.

- Cumplimiento efectivo del 50% de financiación estatal.
- Reducción real de listas de espera y plazos.
- Estrategias integrales contra la soledad no deseada.
- Garantía de atención presencial en servicios esenciales.

En Andalucía no faltan diagnósticos ni advertencias. Falta voluntad política. Cada presupuesto insuficiente consolida el colapso del sistema. Mientras se discuten prioridades, miles de personas mayores envejecen, enferman y mueren esperando una ayuda que la ley les reconoce. Esto no es un fallo técnico: es una decisión política.

Sevilla, 29 de diciembre de 2025

Más información:

FOAM – Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores

954 29 30 48

foam@foam.es

<https://foam.es>